

C.A. de Temuco

Temuco, a veintidós de julio de dos mil veinticuatro.

**VISTOS Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que el Fiscal Regional de la Araucanía don Roberto Garrido Bedwell, en razón de la investigación RUC 2310039890-7, RIT 5007-2023, del Juzgado de Garantía de Temuco, solicitó el desafuero del Diputado de la República Mauricio Antonio Ojeda Rebolledo porque -a su entender-, se han reunido un cúmulo de antecedentes que derivan en la decisión de formalizarlo y requerir a su respecto medidas cautelares personales como autor del delito reiterado de fraude al Fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado. Su autoría se corresponde con lo instituido en el artículo 15, N° 3°, del Código Penal, por haber obrado concertado para su ejecución con funcionarios del Gobierno Regional de La Araucanía -que intervinieron en el ilícito en razón de su cargo-, y detentar el mencionado diputado Ojeda Rebolledo la calidad de empleado público, operando el denominado principio de la comunicabilidad.

Lo señalado se sustenta en que Ojeda Rebolledo, en conocimiento de la precaria situación económica de dos fundaciones -FOLAB y EDUCC-, y por la relación de amistad que mantenía con la representante de las mismas, intervino ante funcionarios del Gobierno Regional de La Araucanía, a fin de que se les asignara la ejecución de dos proyectos presentados, otorgándoles en total la suma de \$365.120.000, por cada uno de los convenios. Concretada la asignación y una vez transferidos los recursos por parte del Gobierno Regional y con éstos, ambas fundaciones habrían pagado mutuos que el mismo diputado y otras personas les habían efectuado con antelación a dichas entidades, habrían pagado honorarios y habrían realizado otras transferencias para fines particulares, totalmente ajenos a los objetivos de los convenios, causando un perjuicio fiscal ascendente



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DVXCXXBTJDY

a 11.490 Unidades Tributarias Mensuales al mes de diciembre de 2022.

El representante del Ministerio Público señaló, además, que el diputado intervino para que se asignara a la fundación FOLAB un nuevo programa, denominado “Impulso turístico audiovisual Malleco Cautin”, el que en definitiva fue declarado inadmisibile, con observaciones.

Asimismo, en estrados, el sr. Fiscal Regional reiteró que el proceder del diputado Ojeda se gestó incitando a quien creó las dos fundaciones FOLAB y EDUCC a postular a fondos públicos, tomando contacto con funcionarios del Gobierno Regional, quienes le indicaron a qué postular y cómo hacerlo, además, habría actuado como captador e inversionista para la fundación FOLAB a quien le inyectó \$45.000.000. Una vez entregadas las cuentas corrientes con los dineros adjudicados, estas fueron vaciadas -dejando sumas ínfimas-, desde que se efectuaron traspasos a diferentes cuentas de los propios administradores de las fundaciones y del diputado sr. Ojeda, devolviéndole a éste incluso sumas superiores a las prestadas (con intereses), agregando que el parlamentario siguió trabajando con las fundaciones y comenzó otro proyecto, ahora en el rubro del turismo.

Insistió en que conforme a su actuar posterior, el sr. Ojeda tenía plena conciencia de la ilicitud de su conducta, en atención a que se reunió con funcionarios del Gobierno Regional con la finalidad de realizar gestiones para evitar se configurara el delito de fraude al Fisco así como también lo hizo con los hermanos de Rinett del Pilar Ortiz Rivera -Juvenal y Miguel, ambos Ortiz Rivera-, indicándoles la conveniencia de hacer desaparecer el teléfono de la mujer, añadiendo que, efectivamente, el parlamentario Ojeda Rebolledo entregó su celular a la Fiscalía pero con retraso y destruido, de tal forma que no fue posible obtener antecedentes del mismo ni de la “nube”, por haber sido formateado a los valores de fábrica.

Todos estos hechos, asegura, son constitutivos del delito reiterado



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DVXCXXBTJDY

de fraude al Fisco, en el cual al diputado, cuyo desafuero se solicita -por su condición de funcionario público-, le cabe participación culpable y penada por la ley.

En su réplica, el persecutor insistió en que la condición de funcionario público se configura por la función que ejerce el diputado quien incumplió sus deberes funcionarios, actuando con infracción del principio de probidad, anteponiendo su interés particular por sobre el público, estando en pleno conocimiento que las fundaciones a las que se ha hecho mención no podrían cumplir con los convenios cuyo financiamiento obtuvieron a través de su intervención.

Por todo lo anterior, solicita, en síntesis, se haga lugar a la formación de causa en contra del Diputado de la República, sr. Mauricio Antonio Ojeda Rebolledo.

**SEGUNDO:** Que por su parte, el abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, de la Región de La Araucanía, don Diego Acuña Gómez, en representación del Gobierno Regional, querellante en la causa RUC 2310039890-7, RIT 5007-2023, sobre fraude al fisco y otros delitos, del Juzgado de Garantía de Temuco, seguida -entre otros-, contra el diputado tantas veces mencionado, solicitó igualmente la formación de causa, avalado en el cumplimiento del estándar necesario para aquello y los antecedentes serios que al respecto, existen.

Argumentó que se está frente a una investigación abierta en la cual se pretende pedir medidas cautelares respecto del parlamentario, razón por la que el persecutor insta por su desafuero, añadiendo que a ese respecto se satisface plenamente el estándar para decretarlo, en atención a que los hechos denunciados revisten caracteres de delito y existen indicios para atribuirle participación en esos mismos acontecimientos.

En cuanto a los denominados “antecedentes serios”, sostiene que el diputado motivó e indujo a la representante de las fundaciones a postular a fondos públicos -para hacerse de dineros-, que se contactó



con funcionarios del Gobierno Regional -que intervienen en distintas etapas del proceso-, que se adjudicaron los convenios y que la representante de ambas fundaciones, una vez recibidos éstos desde Gobierno Regional mediante la creación de dos cuentas corrientes, de inmediato giró diversas sumas por conceptos totalmente ajenos al cumplimiento de los convenios, de modo tal que al día siguiente en una de las cuentas corrientes creadas para el traspaso de fondos quedaron solo \$2.000.000 y \$20.000.000, en la otra, de un total de \$365.120.000, por cada uno de los convenios.

Como antecedente de corroboración, adujo la rapidez con que se llevó adelante el proceso de obtención de los fondos públicos y el cúmulo de actuaciones desplegadas al respecto, desde que se presentaron los programas, se enmendaron, existieron comunicaciones entre coimputados proponiendo a un tercer sujeto para generar las correcciones exigidas por el ente estatal en un par de horas de un mismo día, en circunstancias que en este tipo de operaciones existe un procedimiento debidamente reglado, haciendo mención también a una tercera postulación frustrada.

Entiende que -en esos términos-, se configura el delito de fraude al fisco, en carácter de reiterado y consumado (en su arista de administración desleal, por incumplimiento del principio de probidad), ilícito en el cual al parlamentario le corresponde participación en los términos contemplados en el artículo 15, N° 3°, del Código Penal -coautoría, por la facilitación de medios-, por lo que, en definitiva, pide se acceda a la formación de causa.

En su réplica, señaló que la defensa no ha controvertido los hechos en que se funda la pretensión de desafuero, cuestionando solo la calificación jurídica de aquellos, afirmando -por último-, que la participación se configura a través de la comunicabilidad, desde que sin la intervención del diputado sr. Ojeda, no habría existido la posibilidad que se concretara la adjudicación de los programas a las fundaciones FOLAB y EDUCC.



**TERCERO:** Que el abogado sr. Carlos Tenorio Fuentes, en representación del Diputado de la República don Mauricio Antonio Ojeda Rebolledo, instó por el rechazo del desafuero por cuanto, en su concepto, no se reúnen antecedentes serios y fundados que permitan formar causa en contra de su representado por el delito invocado por el ente persecutor, ya que los antecedentes que se dicen aportados no existen, tal como lo exige el artículo 61, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, ratificado por el artículo 416, del Código Procesal Penal.

Señaló que el fuero busca evitar que se realicen acusaciones infundadas en contra de representantes de la voluntad popular, permitiendo así que éstos puedan actuar independientemente en el ejercicio de sus funciones.

Arguyó que en relación a la solicitud efectuada, en la carpeta investigativa en la cual se cimienta la petición, no hay nada que permita concluir seria y fundadamente que su parte haya tenido participación alguna en algún delito de fraude al fisco, ya que si bien en la petición de desafuero existe un relato de hechos, en parte alguna de ésta ni mucho menos en la carpeta investigativa se explica cómo es que el parlamentario se concertó con terceros ya sea para favorecer a una fundación, para perjudicar al Fisco o para obtener él mismo, alguna ganancia patrimonial.

Afirma que es cierto que su representado reconoce haber prestado dinero a una persona natural, a título personal, perteneciente a la fundación FOLAB, pero agrega que en caso alguno lo hizo con el propósito de obtener una ganancia o permitir que se defraudara al Fisco de Chile.

Agrega que el propio Ministerio Público postula que este delito es una suerte de administración desleal del patrimonio público, cuestión doctrinaria y jurisprudencialmente muy discutible. Más; y sin entrar por ahora a dicha discusión, lo que se esperaría es que se explicara cómo su representado puede llegar a ser administrador de los



dineros del Gobierno Regional de La Araucanía, fundándose exclusivamente en que se trataría de un empleado público, circunstancia que en caso alguno puede constituir un antecedente fundado para formar causa en contra del diputado tantas veces mencionado.

En estrados, se explayó acerca de la ausencia de antecedentes de cargo para la configuración del delito de fraude al Fisco, unido a las inconsistencias fácticas de los testimonios recopilados, más aspectos gananciales de las declaraciones de coimputados actualmente en prisión preventiva.

Insistió en que se pretende formar causa por el delito previsto y sancionado en el 239 del Código Penal, sin configurarse los presupuestos del mismo, alegando que el diputado nunca tuvo el dominio completo del hecho para defraudar de acuerdo a la norma citada; que no es funcionario público que intervenga en su calidad de tal y en razón de su cargo defraudare al Fisco, produciendo el perjuicio que se le achaca.

Expresó que su representado no es administrador de recursos públicos, por lo que existe confusión al respecto y que si bien es cierto que la contraparte expone una conexión funcional para, configurar el ilícito se refiere más a “otras personas” que al diputado.

Por tales razones, solicita se rechace la petición de desafuero.

En la réplica, el abogado defensor sr. Sergio Arévalo Waddington, señaló que si bien en esta sede no es posible controvertir los hechos expuestos por el Ministerio Público, los mismos no son constitutivos del delito de fraude al Fisco y que en cuanto al diputado esos mismos hechos no son típicos, ya que no hay ninguna conducta realizada por funcionario público en razón de su cargo. En este sentido, los hechos que se le atribuyen, tales como haber hablado con el jefe de Gabinete del Gobierno Regional y con una representante de una fundación a la cual le habría prestado un dinero, del cual luego obtuvo su devolución no son constitutivos de ninguna operación de



fraude, la que tampoco se ha señalado cual es. Explica que para que se tipifique el injusto penal en cuestión, dicha operación debe ser de carácter patrimonial y tener como objetivo defraudar o consentir en defraudar, debe existir conexión funcional y violentar el deber de resguardo del erario público, nada de lo cual se desprende de la carpeta del persecutor. Por lo demás, en la administración desleal es necesario que el diputado administre el patrimonio del Gobierno Regional, cuestión que no es tal, por lo que en consecuencia, no hay antecedente alguno para formar causa en su contra.

**CUARTO:** Que para resolver, se debe tener presente que el fuero es una garantía procesal que -en este caso-, protegería al parlamentario de una persecución criminal infundada que inhiba o entorpezca el cumplimiento adecuado de sus funciones.

Sabido es que el fuero posee un fundamento político, asociado al resguardo de la autonomía de los órganos legislativos y al principio de separación de poderes, cuya justificación mediata es el pleno ejercicio de la soberanía popular.

Así, consistiendo el fuero en un privilegio que la ley contempla a favor de determinadas personas en razón de la investidura que detentan, la gestión de desafuero es un antejuicio que tiene por objeto hacer efectiva una condición de procesabilidad general, condicionada a la existencia de antecedentes suficientes para dar lugar a la formación de causa respecto de la persona aforada.

**QUINTO:** Que como ya se ha sostenido por los tribunales superiores de justicia, se trata éste de un juicio de plausibilidad y no de uno de fondo en relación a las imputaciones formuladas en contra de una persona que goza de fuero.

Así, se ha entendido que el estándar de convicción a que se refiere la expresión de "*hallare mérito*" no es otro que aquel que consagran los artículos 140 y 155, inciso final, del Código Procesal Penal, para el otorgamiento de medidas cautelares, desde que el artículo 416, inciso 2º, de dicho cuerpo normativo prescribe



expresamente que: *“Igual declaración requerirá si, durante la investigación, el fiscal quisiera solicitar al juez de garantía la prisión preventiva del aforado u otra medida cautelar en su contra”.*

En consecuencia, para determinar si hay mérito para la formación de causa en contra del diputado Ojeda Rebolledo, deben concurrir únicamente antecedentes que justifiquen la existencia del delito y, además, que estos mismos permitan presumir fundadamente que en él ha tenido participación o concurrencia, en alguno de los grados que la legislación prevé.

**SEXTO:** Que en la especie, el Ministerio Público sostiene que los hechos fundantes de la solicitud de desafuero configuran el delito reiterado de fraude al Fisco, ilícito contemplado en el artículo 239 del Código Penal, en el cual al referido parlamentario le cabría participación en calidad de autor, conforme a lo prevenido en el artículo 15, N° 3°, del mismo texto legal.

Al respecto el artículo 239, inciso 1°, del Código Penal previene en lo pertinente que: *“El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá ...”*

**SÉPTIMO:** Que como ha sostenido la Excma. Corte Suprema, en sentencia de fecha cinco de mayo del año dos mil veintitrés, en causa Rol N° 6732-2019, el tipo penal en cuestión sanciona al funcionario público que, teniendo a su cargo caudales o efectos públicos, interviene en una determinada operación de significación patrimonial para el Estado u otra entidad pública, en el marco de lo cual tiene lugar una defraudación que importa un perjuicio para el patrimonio público. Se trata entonces de una defraudación efectuada por un funcionario que interviene en la respectiva operación en razón de su cargo, cuestión que importa que el injusto se corresponde con un



menoscabo patrimonial ocasionado desde el interior de la administración pública.

Desde la perspectiva anterior, el delito tipificado en el artículo 239 del Código Penal ha de ser conceptualizado como un delito de administración desleal del patrimonio público o más precisamente, de gestión desleal, ello desde que su centro está en el perjuicio patrimonial, más que en el aprovechamiento patrimonial, elemento entonces que permite diferenciarlo claramente de los tipos de estafas, pues el injusto importa una vulneración del principio de probidad, "en tanto estándar para el desempeño de la función, consistente en la falta de fidelidad en la gestión del patrimonio público, que no necesita en modo alguno coincidir con la pretensión de la obtención de alguna ventaja patrimonial correctiva" (Mañalich, Juan Pablo, "La malversación de caudales públicos y el fraude al fisco como delitos especiales", Política Criminal Volumen 7, N° 14, Diciembre de 2012, p.374 y ss.).

**OCTAVO:** Que como ya se ha señalado, el ente persecutor como fundamento de su solicitud, postula los delitos reiterados de fraude al Fisco en los dos proyectos presentados para financiamiento del Gobierno Regional de La Araucanía, por parte de las fundaciones FOLAB y EDUCC, representadas ambas por doña Rinett del Pilar Ortiz Rivera, denunciando que el diputado cuyo desafuero se impetra, para la obtención del financiamiento de esos programas actuó de manera concertada con el Jefe de Gabinete del Gobierno Regional, ambos interviniendo en razón de sus cargos, operando la comunicabilidad respecto del sr. Ojeda, por detentar él también, la calidad de empleado público.

**NOVENO:** Que para resolver acerca de lo exigido por el legislador para justificar el desafuero, deberán tenerse en consideración los antecedentes acompañados a la solicitud de desafuero consistentes en: documentos sobre nombramiento de los imputados y otros funcionarios del GORE Araucanía y el detalle de sus funciones



públicas; documentos sobre Reglamentación de la Cámara de Diputados y del Gobierno Regional de La Araucanía; otros antecedentes relacionados con el sr. Ojeda Rebolledo -dieta, informe policial, informe pericial mecánico y electro-ingeniería respecto del equipo celular-; documentos asociados a las Fundaciones FOLAB y EDUCC; documentos de tramitación de las iniciativas presentadas por las Fundaciones FOLAB y EDUCC a GORE Araucanía; documentos bancarios, y evidencia material.

En cuanto a la participación del sr. Ojeda Rebolledo en el ilícito de que se trata, deberán también tenerse en vista el conocimiento y vínculo de amistad entre el diputado y Rinett Ortiz Rivera -representante de las fundaciones-; las gestiones de financiamiento para la Fundación FOLAB por parte del sr. Ojeda Rebolledo; las gestiones ante el GORE para adjudicación de proyectos o iniciativas a la Fundación FOLAB; la celebración de los convenios entre el GORE Araucanía y las fundaciones FOLAB y EDUCC; el proceso en la aprobación de los proyectos; el destino de los fondos transferidos a las fundaciones FOLAB y EDUCC; la postulación de la Iniciativa "Impulso Turístico Audiovisual, Malleco-Cautín", y la conducta posterior del sr. Ojeda Rebolledo.

**DÉCIMO:** Que sobre el particular, se reitera que esta Corte, al pronunciarse sobre la solicitud de desafuero, debe hacerlo exclusivamente acerca de si autoriza o no la formación de la causa en contra del diputado imputado por los hechos materia de la investigación, sin que esta decisión jurisdiccional pueda extenderse a la plena comprobación del delito y a la participación que en el o los mismos pudo caberle al parlamentario ya indicado, por ser éstos aspectos de competencia del tribunal del fondo, en la oportunidad procesal pertinente.

**UNDÉCIMO:** Que del análisis de los antecedentes ya indicados en el considerando noveno y de las alegaciones vertidas en audiencia por los intervinientes y teniendo en consideración la debida



concordancia que debe existir entre el artículo 416, inciso 2º, en relación con los artículos 140, inciso 1º, y 155, inciso final, del Código Procesal Penal, para este tribunal es dable sostener que, en el caso sublite, concurren los elementos que justifican la existencia de un ilícito penal y; además, esos mismos antecedentes permiten presumir fundadamente que en él ha tenido participación o concurrencia el parlamentario cuestionado, en alguno de los grados que la legislación prevé.

En consecuencia, estos sentenciadores han arribado a un estándar de convicción suficiente para dar lugar a la formación de causa, ya que los hechos denunciados revisten los caracteres de ilícito y concurren indicios dotados de seriedad suficiente para atribuir participación al diputado en cuestión, debiendo ser el o los jueces del fondo quienes, luego de apreciar toda la prueba en su conjunto, determinen en el contexto de un juicio oral y contradictorio, la existencia del delito y culpabilidad que se atribuye al diputado sr. Ojeda Rebolledo.

Por estas consideraciones y conforme a lo establecido en el artículo 61, inciso 2º, de la Constitución Política de la República y el artículo 416 del Código Procesal Penal, se declara:

Que, **SE ACOGE**, la solicitud del Fiscal Regional de la Araucanía don Roberto Garrido Bedwell y; en consecuencia, **SE HACE LUGAR A LA FORMACIÓN DE CAUSA** en contra del Diputado sr. Mauricio Antonio Ojeda Rebolledo.

Redacción a cargo de la ministra Sra. Cecilia Aravena López.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

**Rol N° Penal-963-2024.**

### **PRONUNCIADA POR EL TRIBUNAL PLENO.**

Presidido por su titular ministra Sra. Cecilia Aravena López, y con la asistencia de los ministros y ministras Sr. Carlos Gutiérrez



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DVXCXXBTJDY

Zavala, Sra. María Georgina Gutiérrez Aravena, Sr. José Héctor Marinello Federici, Sr. Alberto Amiot Rodríguez y Ministra (S) Sra. Cecilia Subiabre Tapia. No concurre a la presente resolución el ministro Sr. Alejandro Vera Quilodrán, por encontrarse con permiso gremial, el día de la vista de los antecedentes. No firman el Ministro Sr. José Héctor Marinello Federici y la Ministra (S) Sra. Cecilia Subiabre Tapia, no obstante haber concurrido a la resolución, por encontrarse con permiso de conformidad al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales, el día de ingreso al sistema de la misma.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DVXCXXBTJDY

Pronunciado por la Sala de Pleno de la C.A. de Temuco integrada por los Ministros (as) Adriana Cecilia Aravena L., Carlos Ivan Gutierrez Z., Maria Georgina Gutierrez A., Alberto Amiot R. Temuco, veintidos de julio de dos mil veinticuatro.

En Temuco, a veintidos de julio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DVXCXXBTJDY